

la Universidad. Sólo así se romperá esta situación de indiferencia. A lo que hay que añadir, por supuesto, la urgencia del problema económico.

—La Universidad no puede seguir viviendo de espaldas a la sociedad, usted mismo lo ha escrito en varias ocasiones. ¿Cómo lograr una interrelación más estrecha entre ambas realidades?

C. P.: La democratización de la Universidad no consiste sólo en dejarla que se autogubierne de forma representativa, sino que supone la presencia en el Gobierno de la misma de las distintas fuerzas sociales, que contribuirán a trazar los objetivos, administrar los recursos y fijar democráticamente las líneas de investigación.

—¿No hay un peligro creciente de formación, en esa Universidad, de élites tecnocráticas aferradas a la división capitalista del trabajo y sus privilegios?

C. P.: La idea de la tecnocracia está vinculada estrechamente a la de la información como poder. Hace falta una revolución cultural que posibilite la apropiación por una mayoría de conocimientos que hoy son privilegio de unos pocos. Hay que eliminar las barreras que sustraen la inteligibilidad de las grandes decisiones, que nos afectan a todos. Es absurdo, por ejemplo, que disciplinas como la economía o la sociología no sean estudiadas más que en las Facultades específicas, cuando deben interesar a cualquier ciudadano.

—Se habla últimamente mucho de un supuesto proyecto ucedista de creación de una serie de Universidades privadas en nuestro país. En esas circunstancias está claro que la masificación y el deterioro de las Universidades estatales no plantearían para el poder ningún problema. Tampoco haría falta selectividad en estas últimas...

C. P.: La puesta en marcha de esa iniciativa sería desastrosa para el desarrollo de nuestra Universidad, en la medida en que canalizaría las posibilidades y recursos de nuestra sociedad hacia la formación de élites, que serían las que saldrían de esos centros privados. Ello se produciría, además, en un momento en que la sociedad pide un acceso a la cultura más justo en un país en que ésta siempre ha sido clasista.

—A nuestra clase dirigente nunca le ha preocupado demasiado nuestra Universidad, ya que las élites mandaban a sus hijos al extranjero a estudiar. Pero ese proyecto equivaldría a crear aquí mismo dos tipos de Universidades: una fuertemente elitista y otra sumida en el mayor de los abandonos.

—Claro que todo ello tendría cierta coherencia con la evolución del propio capitalismo español, que, tras su secular actitud hermética ante las necesidades del desarrollo científico, comienza ya a comprender esas exigencias. Aunque, si lo que se rumorea se pone finalmente en marcha, tal comprensión irá lastrada de un fuerte hermetismo social. El patrimonio científico-técnico quedaría así bajo el control de una minoría. ■

AUTONOMA DE MADRID: UN CLAUSTRO HISTORICO

QUE un catedrático de Derecho se cabree ante la convocatoria de un claustro de más de mil trescientas personas para tratar de la reforma universitaria y publique en "ABC" un artículo cargado de demagogia y acusaciones gratuitas, no tiene en sí demasiada importancia. Pero si este cabreo particular es compartido por una llamada Asociación Independiente de Profesores Universitarios (AIPU), de la que el citado profesor, De la Oliva Santos, es, además, secretario general, y miembros o simpatizantes de esa asociación envían un escrito al Ministerio, apoyado por más de seiscientos numerarios—en su mayoría, catedráticos—, donde denuncian el método de consulta ministerial a la Universidades, al tiempo que niegan la representatividad y legalidad de los órganos moderadamente democráticos que comienzan a funcionar en algunos centros superiores, entonces la cosa se vuelve más grave por su trascendencia política.

Pues bien, eso es, ni más ni menos, lo que ocurrió la semana pasada en Madrid, dos días antes de que se celebrara el histórico claustro de la Autónoma. Histórico tanto por el número total de "claustrales" como por su composición: todos los numerarios y doctores (650), un tercio elegido de los no doctores (350), un alumno por cada 50 (500), un tercio del personal no docente (150), etcétera. Claustro oficialmente presidido por el nuevo rector, Pedro Martínez Montávez; los tres vicerrectores, el secretario general, Rodrigo Bercovitz; los decanos de cinco Facultades—cruce de los cua-

les, entre ellos el propio Carlos París, han sido elegidos democráticamente en sus respectivos centros—, los directores de las tres Escuelas Universitarias y el gerente.

Esta es la "masa" que inspiraba un terror visceral al profesor De la Oliva, hasta el punto de hacerle tergiversarlo todo. En efecto, según el articulista, que se remitía a una noticia de prensa (no hay prensa, sino órganos concretos de prensa), el claustro "sería votante, pero no deliberante", porque la "masa no dialoga, ni concede margen de actuación a las personas". Por si fuera poco, viola las normas legales, y la Administración, que "en privado reconocía que era un disparate aplicar los principios democráticos al ámbito universitario", no podía quedarse de brazos cruzados, sino que debía frenar a los manipuladores con la mayoría parlamentaria (UCD-AP, por supuesto). El escrito casi simultáneo de la AIPU, por igual acusador, era, sin embargo, más profesional y tecnocrático en su filosofía: por un lado, negaba representatividad a muchos de los órganos de gestión universitaria, cuyo criterio mayoritario solicitaba el Ministerio porque estaban "constituidos contra toda razón (?) y derecho"; por otro lado, y en contestación a la encuesta, señalaba una serie de puntos "no negociables": la Universidad tiene que ser autónoma frente a las instancias de poder de los territorios autónomos; la selección del profesorado dependerá de pruebas públicas de ámbito nacional, juzgadas por "especialistas", según criterios "estricta-

mente académicos"; el gobierno de las Universidades debe confiarse a órganos funcionales integrados por personas de reconocida capacidad y experiencia, etcétera.

Pero el claustro se reunió...

Lo hizo durante dos días, 14 y 15, y en sesiones de mañana y tarde, en el Palacio de Exposiciones y Congresos. Y nada ocurrió de lo predicho por los interesados catastrofistas. Los mil y pico claustrales presentes—hubo un cierto absentismo de profesores numerarios— debatieron las diecisiete ponencias presentadas por las comisiones y asambleas de las distintas Facultades, así como por grupos particulares, en rigurosos turnos de exposición, réplicas y contraréplicas. En los breves descansos, los grupos se reunían en los pasillos y trataban de unificar criterios. Básicamente, sin embargo, casi todas las ponencias discutidas iban en un mismo sentido: necesidad de una presencia de las fuerzas sociales en el gobierno de la Universidad, que pertenece a la comunidad en su conjunto; cogestión paritaria por los distintos estamentos; creación de un cuerpo único de enseñantes, cuyo contrato debería ser laboral; fiscalización periódica y totalmente democrática de la actividad docente; aumento y control público del presupuesto para la educación superior...

Estos son los vientos que comienzan a soplar tímidamente en la Universidad española, y que tanto asustan a la AIPU.

Estos son los vientos que comienzan a soplar tímidamente en la Universidad española, venciendo la atonía de la que se habla en la entrevista con C. París.

Queda por ver, sin embargo, qué hará, a la postre, el Ministerio con los resultados de su consulta. ¿Tratará de ganar "democráticamente" en las Cortes, con ayuda de AP, lo que está seguramente perdido en la Universidad? Ello provocaría, sin duda, nuevos conflictos. Pero, ¿y si el Gobierno se sacase entonces de la manga sus Universidades privadas? ¿Qué le importaría al deterioro de las demás? ■ J. R.



Mesa presidencial del claustro de la Autónoma.